

Nº. 119 Noviembre 2017 - @cinco_ni

PERSPECTIVAS

Suplemento de análisis político



Elecciones municipales Crisis de legitimidad

PERSPECTIVAS es una publicación del **Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)**, y es parte del **Observatorio de la Gobernabilidad** que desarrolla esta institución. Está bajo la responsabilidad de Sofía Montenegro. Si desea recibir la versión electrónica de este suplemento, favor dirigirse a: cinco@cinco.org.ni



¿Apatía o rebeldía?: la abstención electoral

Al caer la tarde del día 5 de noviembre, pese a los extraordinarios esfuerzos realizados por la estructura de campaña del orteguismo, la inmensa mayoría de los nicaragüenses no acudió a votar a las Juntas Receptoras de Votos, cuyos miembros descansaban su aburrimiento sobre paquetes de boletas electorales sin usarse.

El oficialismo envió a sus activistas a tocar las puertas, casa a casa, invitando, amenazando o advirtiendo de castigos por llegar, si las personas no iban a votar. Los empleados públicos, incluyendo maestros, maestras y trabajadores de la salud, habían sido notificados personalmente y por mensajes de texto que debían acudir a las urnas y como constancia de tal hecho, debían tomar fotografías de su dedo manchado con la tinta usada y del voto que habían realizado. Su reporte debía ser enviado a un coordinador previamente establecido, que casi siempre coincide con su superior jerárquico en la institución en la que laboran.

Durante el día, varios contingentes de personas fueron movilizados a votar dos, tres o más veces, haciendo uso de sus cédulas, duplicaciones de las mismas o bien de las tarjetas amarillas que habían sido distribuidas desde la noche anterior y autorizadas como credencial para votar desde las dos de la tarde del día de las votaciones.

Los medios oficialistas mostraron desde

temprano las fotografías y videos de conocidas personalidades del ámbito religioso, empresarial, deportivo y cultural, llegando a votar.

A las seis de la tarde, era claro que nada del extraordinario esfuerzo desplegado, había servido. Se había registrado la mayor abstención conocida en una elección en Nicaragua, estimada por el Frente Amplio por la Democracia en un 80% y que el consorcio de observación electoral ciudadana Panorama Electoral, ubicó en cifras similares a las de 2016. Las actas que se han conocido muestran que, en efecto, la abstención alcanzó niveles sin precedentes en la historia electoral del país.

A las tres de la tarde, cuando Ortega acudió a votar, se lamentó de la magnitud de la abstención. En efecto, quienes no fueron a votar habían derrotado al orteguismo y a su mascarada.

Sería una equivocación ver el abstencionismo como un reflejo de una actitud de apatía de los nicaragüenses respecto a las elecciones. Ese podría ser el caso en otros países, donde las personas se han aburrido de votar, pero no en Nicaragua donde aún la ciudadanía desea votar, por haber constatado en 1990 que era un mecanismo de resolución de conflictos y alternabilidad en el poder. La abstención no fue un acto de apatía, sino de rebeldía. Es la manera en que una mayoría de nicaragüenses encontró para decir que el sistema electoral está completamente colapsado, que no tiene credibilidad por estar

sometido por completo a la voluntad de la familia Ortega Murillo.

Los millones de nicaragüenses que no fueron a votar, ciertamente no están endosando a alguna fuerza política en particular, sino que están clamando por un sistema electoral que actúe con transparencia, que sea árbitro de verdad en elecciones limpias y justas. Lo mismo había indicado la abstención durante las elecciones nacionales de 2016, pero fue descartado por Ortega y sus aliados, quienes trataron de poner la molesta evidencia bajo la alfombra, como un asunto incómodo que debía olvidarse y no repetirse. Pero no funcionó.

El “zancudismo” al descubierto

La abstención no solamente repudió el dominio de Ortega sobre el sistema electoral, sino que también expresó la crisis de los partidos políticos participantes.

Fue evidente que miles de miembros y simpatizantes del FSLN tampoco acudieron a votar. Lo habían advertido desde el momento en que Ortega y su esposa impusieron a “dedazo” limpio a candidatos y candidatas, la mayoría de ellos aspirando a ser reelectos, pero repudiados dentro de sus localidades por conductas corruptas, nepotismo y abusos de todo tipo.

La cúpula orteguista logró aplacar el fuego de unas protestas prontamente silenciadas, pero no pudo apagarlo. La abstención mostró una fractura dentro del FSLN, entre la voluntad de Ortega, las aspiraciones y decisiones de la base sandinista. Al final del día 5 de noviembre, el orteguismo no había logrado movilizar a su tradicional 35% de los votantes aptos. Este es, ciertamente, un hecho inédito, pues hasta hace poco, la voluntad del caudillo autoritario se asumía como mandato divino. Una crisis de autoridad y legitimidad interna está a la vista, tal como lo evidenció la escasa convocatoria.

Las personas que se identifican como opositoras o independientes que no fueron a votar, tomaron clara distancia de los llamados a participar, realizados por los partidos que se incluyeron en el proceso electoral contra viento y marea.

La mayoría de esas fuerzas políticas han sido reconocidas como extensiones del FSLN para llenar cupos de miembros y fiscales en los órganos electorales. El PLC ha

estado sometido al pacto Ortega-Alemán desde 1998, que lo ha arrastrado a su peor condición, la de rémora del orteguismo. Ciudadanos por la Libertad (CxL), por su parte, entró ahora a la categoría de colaboracionista del régimen. Todos esos partidos han mostrado una tibia y complaciente conducta respecto a las múltiples anomalías desde el inicio mismo del proceso electoral. Ninguno ha podido aportar legitimidad a las elecciones municipales, ni al sistema electoral, ni a sus resultados. Al contrario, la crisis total de legitimidad los alcanzó ampliamente.

Para el PLC y para CxL, los resultados fueron dramáticos y desventajosos, no por las cifras que ha dado el Consejo Supremo Electoral, sino precisamente por las que ha ocultado y manipulado.

El PLC fue colocado como segunda fuerza por la mano de Ortega, quien mueve las cifras de resultados a su conveniencia. Como se dice en el béisbol, queda “embasado”, para servir de contraparte o careador en eventuales negociaciones posteriores. CxL queda en una crisis severa al haber entrado a una componenda en la que, además de deslegitimado, ha salido trasquilado. Su dependencia de la voluntad del orteguismo ha quedado manifiesta en todas sus tonalidades.

Por su parte, Yatama, el partido indígena con peso en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, fue barrido de las tres municipalidades que estaban bajo su administración, como castigo por su volubilidad en su relación con el régimen.

Fraude y violencia

Como en pasados procesos electorales, el FSLN había preparado las condiciones para un fraude masivo, toda vez que la decisión de la familia Ortega Murillo era avanzar en el control de las municipalidades del país. Quienes apostaban a que Ortega cedería gobiernos municipales se dejaron llevar por el espejismo de las amabilidades y promesas de cambio. Para el régimen, sigue siendo prioritario y no negociable, continuar con su concentración de poder en todos los ámbitos institucionales y en todos los niveles. Eso es lo que han demostrado los “resultados” de las votaciones.

Vale la pena, sin embargo, repasar la ruta del fraude, misma que aún está en marcha.

La observación ciudadana del Frente Amplio por la Democracia (FAD) y del consorcio Panorama Electoral, constató que, la manio-



bra conocida como “el ratón loco”, que consiste en reubicar a los votantes a sitios lejanos o simplemente perderlos del padrón, fue la más utilizada en todo el país. Centenares de personas de cada centro de votación fueron impedidas de votar con esa treta.

En paralelo, el orteguismo proveyó a sus simpatizantes de cédulas duplicadas y de tarjetas de auxiliares electorales, las llamadas “tarjetas amarillas”, con las que podían votar en varias juntas y varias veces. Estos procedimientos complementaron la movilización de contingentes de policías y soldados desplazados para alterar las cifras de votación en municipios sensibles como los del llamado “corredor de la contra” que, junto a los municipios de la zona proyectada para el canal interoceánico, ha exhibido una fuerte movilización contra el régimen de Ortega.

El fraude en las Juntas Receptoras de Votos, se facilitó por el uso de dos tipos de tinta, ampliamente demostrado por ciudadanos que filmaron y establecieron la evidencia que una de ellas no era indeleble. Y, finalmente, un detalle clave: las copias de las actas de escrutinio son, en su mayoría, ilegibles.

La manipulación de las cifras de votos y votantes ha quedado clarísima en la página web del Consejo Supremo Electoral. El municipio de Bocay, apareció inicialmente con una aplastante victoria del candidato del FSLN, menos de doce horas después, las cifras favorecían a CxL, siendo proclamado como ganador, para otras doce horas después, volver de nuevo a control del orteguismo. Similar contingencia sucedió en El Jicaral. San Pedro de Lóvago también ha re-

gistrado todo tipo de altibajos y las últimas cifras publicadas, un empate virtual, abrieron una elevada conflictividad entre partidarios del PLC y CxL.

De nuevo, como sucede desde 2011, no se han publicado cifras de cada Junta Receptora de Votos, sino solamente agregados municipales. Esa decisiva omisión es la que pretende ocultar la magnitud de la abstención y del fraude. Sin publicación de resultados por mesa electoral, no se pueden cotejar los datos con las actas fotografiadas y publicadas en las redes sociales por la ciudadanía. Los partidos colaboracionistas, pueden alegar la ilegibilidad de las actas de escrutinio para no forzar una comparación de los resultados en sus manos con los que aún no publica el Consejo Supremo Electoral.

Según la Policía Nacional, en trece municipios del país ha habido actos de violencia y según la misma institución han sido instigados por el PLC, CxL y Yatama. Solamente Yatama ha respondido a esa acusación. Los otros dos partidos no han reaccionado reclamando a la institucionalidad policial por sus aseveraciones.

La violencia es hija del fraude electoral. La responsabilidad, en primer lugar, de los actos de violencia debe ser atribuida al propio Ortega, quien concentra el poder total en Nicaragua y ha pervertido absolutamente el sistema electoral. Por otra parte, es consecuencia directa de la desesperación de comunidades abandonadas a su suerte por los líderes nacionales de sus partidos que entraron en arreglos con quienes les roban las elecciones. La violencia es, también, el mé-

todo del régimen de Ortega para imponer su voluntad, ordenando la intervención de pandillas armadas que actúan en complicidad con la Policía Nacional e incluso con fuerzas del Ejército. Este modus operandi, es ya conocido ampliamente por los nicaragüenses.

Los enfrentamientos violentos han sido sensiblemente más graves en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, en las localidades de Bilwi y Sandy Bay. La conmoción y polarización en las comunidades de esa región, podría agravarse en el contexto de las elecciones regionales que se realizarán en marzo de 2018.

El saldo es trágico y doloroso. Al menos siete muertos, hasta el cierre de este boletín y decenas de heridos, familias en duelo, decenas de prisioneros, infraestructura destruida o quemada, comunidades en zozobra y profundamente divididas, viejas heridas abiertas. El régimen de Ortega ha estado decidido a pagar cualquier costo por el control total del poder político.

Poco o nada de estos hechos han sido vistos por la misión de la OEA.

La danza de la OEA

La manera en que ha procedido el régimen de Ortega, desde el principio de este proceso electoral y el informe preliminar presentado por la misión de la OEA al término de su estadía en el país, confirman las especulaciones sobre el arreglo entre el oficialismo y el Secretario General de ese organismo, Luis Almagro.

Ortega siempre ha sabido que la misión encabezada por Wilfredo Penco, un antiguo consultor del Consejo Supremo Electoral, le serviría para conseguir una cubierta de legitimidad, de la que está urgido, por el desprestigio y el aislamiento internacional y en particular, por la amenaza de la Nica Act. En el texto mismo de esa iniciativa, los proponentes expresaron su respaldo a una misión de observación electoral de la OEA en Nicaragua, mientras que los cabilderos contratados por el régimen han esperado el informe de la OEA para tratar de detener la aprobación en el Senado de los Estados Unidos de tal ley.

El informe preliminar de la misión en el país ha sido dual y superficial. Silencia el control que el partido orteguista ejerce de manera directa sobre la totalidad de la estructura electoral, desde el Consejo Supremo Electoral hasta la última Junta Receptora de Votos. Obviar este hecho esencial desvirtúa

completamente las aseveraciones del informe, pues ese es, precisamente, el origen de la crisis y el colapso del sistema electoral, de la falta de credibilidad de las elecciones y sus resultados, de los fraudes repetidos y de la ilegalidad e ilegitimidad de las autoridades. Resulta completamente maliciosa o de una ignorancia peligrosa, la aseveración de que en Nicaragua el Poder Electoral es independiente y el supuesto de que la institucionalidad es funcional en el país.

El informe de misión de la OEA, se internó en laberintos tecnocráticos para evadir una realidad política incontrastable. Si un pueblo, mayoritariamente no sale a votar, hay que preguntarse por qué, antes de responderse con toda comodidad y complacencia que así es en todos lados. No es aceptable que una misión de un organismo internacional que se erige sobre la Carta Democrática Interamericana, vea natural un déficit grave de participación ciudadana, que constituye la base de cualquier democracia. Sin expresión de la decisión del pueblo, la democracia no existe, no importa que tan bien aceitada esté la maquinaria para la identificación ciudadana o para el registro de nacimientos y defunciones. Sin participación de la mayoría del pueblo, no se construye democracia.

Si la misión se hubiese preguntado por qué la ciudadanía prefiere hacer denuncias en las redes sociales, en los medios de comunicación o llevarlas a su consideración, habría podido percatarse que la mayoría del pueblo nicaragüense cree y entiende que no existen instituciones independientes en el país. Que no es un asunto de procedimientos, sino el reflejo de la existencia de un régimen autoritario que controla los hilos de la totalidad de los espacios institucionales en Nicaragua.

Afirmar que los hechos de violencia deben ser investigados y sancionados, sin poner atención a los videos profusamente distribuidos en las redes sociales, en los que se ve a la Policía actuar en connivencia con grupos afines al gobierno para quemar casas y perseguir a opositores, es no darse cuenta que en Nicaragua, la Policía no cumple su papel de agente del orden, sino de agente político de los intereses en el poder.

Es difícil concluir que un grupo tan grande, con la experiencia y calificación de los profesionales que lo integraron, no se percate de asuntos tan gruesos. Por eso, solo se puede afirmar que la misión de la OEA no se hizo, deliberadamente, las preguntas correctas, como un gesto para ganar la voluntad de



Ortega, tal vez para pavimentar el camino a la misión de tres años del Secretario General de esa organización en Nicaragua o tal vez por simple complicidad de antiguos amigos. Cualquiera sea la razón, la misión y sus resultados han dejado gravemente comprometida la credibilidad de la OEA.

En respuesta al informe de la OEA, Ortega ha prometido impulsar una reforma a la Ley Electoral para “mejorar” el sistema antes de las elecciones regionales que se realizarán en la Costa Caribe en 2018. Por su parte, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que agrupa a distintas fuerzas y corrientes opositoras, demandó cambios profundos en el sistema electoral que lo sustraigan del control del orteguismo y nuevas e inmediatas elecciones generales y municipales.

Legitimidad cero

Si Ortega aceptó invitar a una misión de acompañamiento electoral de la OEA, fue porque necesitaba que le extendieran una credencial de legitimidad.

Sin embargo, el modo y la forma en que se condujo el proceso electoral, la masiva abstención, el fraude descarado, la violencia y la represión han dejado descolgado todo intento de la misión de la OEA de prestar algo de ropa para cubrir la desnudez de la naturaleza del régimen.

Al igual que el proceso electoral nacional,

éste también ha quedado sin punto de apoyo. De nada ha servido la participación de partidos “zancudos” colaboracionistas, ni el despliegue de acompañantes de la OEA, ni las fotografías de personalidades votando con expresión confiada y hasta victoriosa. Nada ha podido aportar, ni un gramo de legitimidad, a estas designaciones, que no elecciones.

Ortega ha sido confrontado con éxito por la mayoría de la ciudadanía, que no le ha concedido el beneficio de la duda. El país, queda ahora, gobernado por autoridades nacionales y municipales impuestas por los dedazos, el fraude, los pactos y la represión. Ortega ha cerrado el avance sobre la totalidad de las instituciones y lo ha hecho, no por simple espíritu deportivo, sino para usarlas a favor de sus intereses económicos, políticos y de control social.

Con menos recursos económicos para restaurar el clientelismo y afectado por las sanciones a Venezuela, desprestigiado internacionalmente y sin legitimidad interna, el régimen de Ortega queda con todos los ingredientes de una crisis política sobre la mesa.

Podrán emerger nuevas y mejores condiciones para los nicaragüenses si la oposición que resistió las tentaciones colaboracionistas, une sus esfuerzos para plantear opciones de salida a la situación nacional. La abstención de la mayoría de los nicaragüenses ha construido una oportunidad para ello.